

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

<b>Demandante</b>	ADRIANA MARIA RESTREPO DÍAZ
<b>Demandado</b>	AFP PORVENIR S.A. y OTROS
<b>Tipo de proceso</b>	Ordinario
<b>Radicado Nacional</b>	05-360-31-05- <b>002-2020-00054</b> -02
<b>Instancia</b>	Segunda
<b>Providencia</b>	Interlocutorio 26 de 2021
<b>Tema y subtema</b>	Apelación liquidación de agencias en derecho
<b>Decisión</b>	Confirma

**Medellín, veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021)**

En la fecha, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral integrada por los magistrados, Martha Teresa Florez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, entra a resolver el recurso de apelación contra el auto del 3 de junio de 2021, proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Adriana María Restrepo Díaz** en contra de la **AFP Porvenir S.A. y otros**, código radicado número 05360 3105 **002 2020 00054** 02.

**Antecedentes**

Mediante proveído del pasado 13 de junio, el Juzgado de conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P., liquidó y aprobó las agencias en derecho en la suma de en **\$2.000.000.00 a cargo de la codemandada Porvenir S.A**, en primera instancia; y

**\$908.526.00** en esta sede a cargo de cada una de las demandadas (Porvenir S.A y Colpensiones).

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado del demandante formuló recurso de apelación argumentando que conforme con el desarrollo del proceso y los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, el A quo no respecto los respectivos topes, esto es: *i) el 7.5% del valor de la condena y ii) 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por la obligación de hacer*. Lo anterior, porque el valor fijado por concepto de agencias fue de **\$2'000.000.00** para la AFP PORVENIR S.A. y debió ser de **\$9'085.260.00** que equivalen a 10 SMMLV para 2021 a cargo de la demandada, y el 7.5% del valor de la condena por obligación de dar.

Agregó que además las sumas fijadas en las instancias no resultan acordes a la naturaleza del proceso, duración, y su actividad como apoderado judicial, pues la intervención fue eficaz y muy profesional de acuerdo con lo delegado, describiendo de manera clara y precisa los hechos, las pretensiones y los fundamentos de derecho en la demandada, citando igualmente las normas legales y jurisprudenciales que sirvieron de apoyo para resolver el asunto sometido a consideración de la jurisdicción, así mismo se aportaron las pruebas que se tenían en su poder, las que fueron conseguidas luego de una ardua labor extraprocesal en contra de las AFP y que en todo caso fueron fundamentales, conducentes y pertinentes para resolver el asunto, así mismo, la demandante en las audiencias que se celebraron estuvo representada por el apoderado de manera personal y directa quien intervino activamente en la práctica de las pruebas, presentando alegatos de conclusión y recurso de apelación, luego, a pesar de todos los obstáculos que presentaron las AFP buscando que se negaran las

pretensiones, finalmente fue vencida gracias a la estrategia jurídica por él emprendida.

Por lo anterior, solicitó modificar el valor de las agencias en derecho fijadas por el juez de primera instancia, para en su lugar fijarlas en 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes por la obligación de hacer y el 7.5% de las condenas por la obligación de dar, en contra de ambas entidades.

Mediante proveído del 11 de junio del cursante año, el Juzgado de conocimiento, al encontrarlo debidamente sustentado concedió el recurso de alzada, disponiendo el envío del expediente a esta Corporación.

### **Consideraciones**

La inconformidad del recurrente radica en el valor por agencias en derecho fijado en primera instancia, al considerar en síntesis que las mismas se tasaron muy por debajo en comparación a lo pretendido y a lo logrado en el proceso, sin atender lo establecido en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

En dicho compendio, se regulan las tarifas en procesos declarativos en general, especificando que cuando se formulen pretensiones de contenido pecuniario, **de mayor cuantía, en primera instancia, se fijaran entre el 3% y el 7.5% de lo pedido** y en aquellos asuntos **que carezcan de cuantía, entre 1 y 10 SMMLV.**

En virtud de lo anterior, corresponde a esta Colegiatura determinar si las agencias en derecho que en su momento fijó el *A-quo*, encuadran en

lo establecido en el precepto señalado o, en caso contrario, si deben ser modificadas.

Es menester precisar que la norma citada no puede estudiarse e interpretarse aisladamente, pues se observa que el Artículo 2º, al hacer alusión a los criterios en los cuales debe basarse el juzgador para tasar las agencias en derecho, indica que:

*"Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se puedan desconocer los referidos límites.*

Significa lo anterior, que el juzgador cuenta con diferentes pautas para determinar la suma correspondiente a las agencias en derecho y que lo hace de una manera discrecional pero dentro de los límites legales enunciados.

En primer lugar, ha de precisarse que, en este caso, únicamente la codemandada AFP Porvenir S.A, fue la única condenada a pagar las costas del proceso en primera instancia.

Ahora, debe advertirse que lo debatido **correspondió a un asunto sin cuantía**, en la medida que se trató de un proceso declarativo, en el que se estableció la ineficacia de una afiliación, imponiéndose como consecuencia a las codemandadas obligaciones de hacer, lo que permite al juez fijar un monto de **hasta 10 salarios mínimos legales por agencias en derecho**, sin que pueda aplicarse el 7.5%, como lo pretende el apelante, en la medida que la imposición de costas en primera instancia a cargo de la sociedad referida, única condenada a

este concepto en primera instancia, tuvo como causa la prosperidad de una pretensión sin cuantía.

En ese orden de ideas, el tope máximo del valor de las agencias en derecho en este asunto que podía imponer el juez de primera instancia equivalía a **\$8.778.030.00** (10 SMLMV) y en este trámite se estableció una suma de **\$2.000.000.00** a cargo de Porvenir S.A, monto que se encuentra dentro del tope máximo señalado en la norma, y que a juicio de esta Corporación, se compadece con la gestión desplegada por el apoderado judicial en la medida que el asunto no ofreció mayor complejidad al ser un debate ya decantado y pacífico conforme a la jurisprudencia especializada.

Frente a las agencias en derecho de 1 salario mínimo legal vigente para la época, impuestas por esta colegiatura, a cargo de cada una de las entidades demandadas, se consideran igualmente razonables, por lo que no hay lugar a modificación, ello atendiendo a las mismas reflexiones de orden cualitativo ya expuestas, y a que conforme a **lo consagrado en la disposición antes transcrita en relación con el límite de las agencias para esta instancia, las mismas se encuentran dentro del tope permitido, razón por lo que no hay lugar a modificación**, imponiéndose en consecuencia la **confirmación** de la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia, por no haberse causado.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN,**

## Resuelve

**CONFIRMAR** el auto proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, el 3 de junio del cursante año, dentro del proceso ordinario laboral promovido por **Adriana María Restrepo Díaz** en contra de **Colpensiones, Porvenir S.A. y Colpensiones**, conforme se indicó en la parte motiva de este proveído.

**Sin costas** en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **estados virtuales**, artículo 295 C.G. del P. en concordancia con el Decreto 806 de 2020.

**Los magistrados** (firmas escaneadas)

  
LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL  
Magistrada

  
MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO  
Magistrada

  
ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA  
Magistrado

Certifico: Que el auto anterior fue notificado por **ESTADOS** No.113 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a las 8:00 a.m. Medellín, 30 **de junio de 2021**

---

Secretario